

Una nota sobre crisis y estratificación social

JOAQUÍN AZAGRA ROS

Universitat de València

Recibido: 26 de marzo de 2012 · Aceptado: 19 de abril de 2012

RESUMEN

La crisis actual ha creado un colectivo específico de personas en riesgo de caer en la exclusión social. Básicamente se trata de jóvenes e inmigrantes. En ambos casos se agrava cuando coincide con escasa formación y cargas familiares. Su futuro es más que incierto y cabe predecir que la sociedad tardará en encontrarles acomodo pues ni el actual modelo productivo, ni el que pueda sustituirlo, van a generar empleo para esos perfiles. Pero es que tampoco el actual modelo de protección social, lento en sus reacciones y sesgado en favor de currícula laborales estables y continuados, les dará cobertura suficiente. La E.P.A. nos permite una aproximación al problema desde el ejemplo de la Comunidad Valenciana, especialmente válido por las características de su crecimiento previo a la crisis.

PALABRAS CLAVE: Crisis, exclusión social, modelo productivo y estratificación.

ABSTRACT

The current crisis has created a specific group of people at risk of dropping into social exclusion. These are basically young people and immigrants. In both cases the situation is worsened when this coincides with little training and family commitments. Their future is at least uncertain and it is possible to predict that society will take a long time to find a place for them, since neither the present production model, nor any that could replace this, are going to generate employment for these profiles. And neither will sufficient cover will be given either by the present social protection model, slow to react and biased in favour of stable and constant employment curricula. The E.P.A. (active population survey) provides an approach to the problem from the example of the Valencian Community, particular valid through the characteristics seen in its growth prior to the crisis.

KEY WORDS: Crisis. Social exclusion. Production model and stratification.

CORRESPONDENCIA

joaquin.azagra@uv.es

La sociedad que surgió tras la crisis del 74 ha sido definida de muchas maneras en función de qué perfiles de ella quieran acentuarse: postindustrial, postfordista, postmoderna, líquida, global, del riesgo, sin brújula, etc. En cualquier caso, términos que aluden a la profunda transformación habida en ese último cuarto del siglo XX. De la mano de Bell, Touraine, Goldthorpe y otros, se han ido concretando los rasgos de ese cambio en el ámbito social. En el caso español, se ha dado una suma de procesos que han dado mayor aceleración e intensidad a tales cambios, al punto de justificar el adjetivo de nueva para definir la sociedad española que se abre al siglo XXI. Recientes trabajos de síntesis han asentado una interpretación de las características y tendencias que la definen (Del Campo, Tezanos, 2008). Este trabajo pretende tan solo contrastar si hay motivos para pensar que la crisis iniciada en 2008 ha servido para conformar o quebrar las tendencias finiseculares al respecto.

Lo haremos a partir de datos estadísticos referidos a la Comunidad Valenciana porque en ella concurren elementos singulares. Es una región de la periferia europea con parecidos problemas a otras, pero que ha sido quintaesencia de un tipo de crecimiento basado en el crédito fácil, la construcción e inversión inmobiliaria que ha multiplicado la intensidad y consecuencias de la crisis. Con un tremendo endeudamiento, tanto público como privado, con unas empresas con déficit de tecnología, productividad y tamaño, con unos servicios privados parcos en calidad y productividad, con un sistema bancario del que han desaparecido Cajas y banca autóctona, con un problema de desempleo apabullante y casi la mitad de una generación de jóvenes sin expectativas, es un buen banco de pruebas para comprobar esa hipótesis.

1. LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD VALENCIANA: 1982-2007

Desde que la Comunidad Valenciana accediera al autogobierno, configurando así un nuevo entorno institucional, determinante para su desarrollo, su fisonomía se ha transformado. Hasta la crisis, podíamos pensar que el cambio le había sentado bien. En ese cuarto de siglo ganó millón y medio de habitantes y su renta *per capita* llegó al 83% de la media de la Eurozona. Ese incremento era menor al de la media española pues en 1980 estaba en el 98,8% y en 2007 en el 90,2% de dicha media. Era debido en parte, a que el crecimiento demográfico se basó en los inmigrantes que ocuparon los trabajos peor remunerados. Por eso, el retroceso relativo no empañó la percepción de que fueron tiempos en que aumentó nuestro nivel de vida. Y que esa percepción tuviera base real. El Índice de Desarrollo Humano –media de indicadores de salud, educación y bienestar material– pasó del 0,846 al 0,938 (Herrero, Soler, Villar, 2010: 227) y el nivel de renta nos incluyó en el selecto club de los países desarrollados, aunque fuera en su banda más baja. Cuando viajamos a Europa, y nuestros estudiantes lo hacen casi en masa, no nos asaltan los complejos de años atrás, al ver cómo aquellos extranjeros consumían bienes distintos, se beneficiaban de mejores servicios públicos o privados y organizaban su vida en un marco de libertades.

Fue un proceso de reasignación de recursos que implicó al capital y al trabajo, pero que afectó a la demografía, al territorio y a las gentes. Lo hizo de modo análogo a las sociedades de nuestro entorno. Somos más ricos, pero también más viejos. Con familias cortas y diversas. Nuestra natalidad es muy baja y los saldos vegetativos estuvieron a punto de ser negativos a fines de siglo cosa que evitaron los inmigrantes, mucho más prolíficos. Lo cual significa que la inmigración empieza a determinar parte de nuestras características. Somos, pues, mestizos e interculturales.

También urbanos y litorales pues el 90% de la población se concentra en menos de la mitad del territorio, preferentemente en una costa colmatada en exceso, mientras se desertifica el interior. De 541 municipios, 64 acogen el 72,4% de la población en tanto que 218 apenas reúnen el 1,8%. Lo rural es casi historia, desde luego no el referente que fue hasta hace bien poco. Y una cuestión dirimente: es esta una sociedad feminizada en la que la incorporación de las mujeres al mercado laboral ha generado cambios trascendentes en las estructuras familiares, sociales, económicas y culturales.

La composición del PIB ha variado. Aquella agricultura que en 1975 suponía el 9% del PIB y el 17,9% del empleo, era el 2,1% y 2,8% respectivamente en 2007. Su declive permite hablar de *desagrarización*, un proceso de largo recorrido iniciado en los 60 que no parece tener fin. Sus cifras cobran más significado en una sociedad en la que el referente agrario configuraba parte esencial de su imaginario. Ese descenso es real en términos absolutos, aunque su carácter comercial y los avances modernizadores todavía le confieran presencia económica y demanden servicios de cierta magnitud. Otra cosa es la industria ya que ahí el descenso [del 32,5% del PIB y el 33,1% del empleo al 17,9% y 18,2% entre ambas fechas] lo es sólo en términos relativos pues en términos absolutos ha aumentado su valor, aunque no tanto en empleo. Pese a sus problemas de tamaño y productividad, mantuvo un apreciable nivel de competitividad y bien pudiera afrontar futuros cambios de modelo a partir de su sólida base exportadora siempre que sea capaz de potenciar entornos favorables para las *pymes* aprovechando las economías externas en los distritos industriales y las concentraciones urbanas con base industrial.

El cambio por excelencia se ha sustanciado en los servicios. En 1975 (final del desarrollismo de los 60) ya suponían el 50,5% del PIB pero sólo el 39,8% del empleo. En 2007 eran el 67,5% y 65% de PIB y empleo. Siendo

pertinente señalar que en este rápido e intenso proceso, ha sido muy importante el desarrollo del sector público, especialmente en lo que a empleo se refiere. De esos 65 puntos porcentuales, 18,1 corresponden a empleados públicos y 46,9 a servicios de mercado. El peso del sector público valenciano supera al de la industria, tanto en valor como en empleo. Suscita algunas dudas acerca de su dimensión. Aparte de funcionarios y empleados públicos que superan el cuarto de millón, están los jubilados, discapacitados y perceptores de otros tipos de pensión que rozan el millón de personas y habríamos de añadir a los parados con subsidio de desempleo. Dicho de otro modo, de cada 10 valencianos casi 4 perciben rentas del sector público. Pese a lo cual no debe concluirse que el sector público valenciano esté sobredimensionado pues su porcentaje en términos de PIB, es del 36,8%, o sea, por debajo de la media de las CCAA que se sitúa en el 39% y a distancia de otras regiones. Diferencias originadas en los distintos niveles de riqueza, en las políticas de los gobiernos regionales, pero sobre todo "en la diferencia de recursos públicos disponibles en cada territorio" (Pérez (dir.), 2011: 129). En ese sentido, este no es un territorio favorecido por el sistema de financiación autonómica. Perjudicado en origen por lo inexacto del concepto de gasto equivalente a los servicios preexistentes en cada región, lo fue aún más por la rigidez del sistema para integrar incrementos poblacionales y cuando al fin se ha corregido, la crisis ha hecho bajar los ingresos anulando los efectos de la corrección.

Por lo que respecta a los servicios de mercado, la Comunidad Valenciana ha seguido el camino de la modernidad. Impulsos derivados de ajustes empresariales en la industria y también en una agricultura empuñada pero modernizada. Precisamente los servicios a empresas figuran entre los de mayor crecimiento, con margen para seguir haciéndolo aunque con el reto de aumentar su productividad. También han crecido, claro, los alentados por el auge constructor, incluidos los financieros. Asimismo se ha desarrollado

el comercio internacional de servicios. En otro nivel, los derivados del mayor consumo de las familias, desde el comercio minorista –Mercadona es la primera empresa del país- a otros nuevos como el del ocio que ha abierto un importante nicho de oportunidades y naturalmente el turismo. Aparte, los servicios generados en el sector público pero no sólo en él sino también en el privado en ámbitos compartidos, lo que se ha fomentado en los últimos tiempos vía conciertos sanitarios y educativos.

Sobre estas tendencias, el auge turístico y constructor que se disparó desde fines de siglo, ha impulsado aún más los servicios, especialmente en los subsectores ligados a dichas actividades. De hecho, la aportación al PIB del sector de Hostelería y Comercio, representa el 19,2% del empleo y el 15,3% del PIB. A su vez, el 16,9% del empleo y el 15,4 del PIB corresponden a la Administración Pública, Educación, Sanidad y Servicios. En cuantos a los servicios inmobiliarios, empresariales y de intermediación financiera son un 18% del PIB y el 9,5% del empleo. Súmese a ello el 12,9% y 14,8% de PIB y empleo correspondientes a la construcción y comprobaremos que esos cuatro sectores resumen casi dos tercios de la riqueza y el empleo. Compárese con el subsector industrial más destacado, el de minerales no metálicos –cerámica sobre todo- que significa el 2,4% del PIB y del empleo. La imagen de un país definido por la agricultura y las industrias tradicionales ha quedado arrumbada por las transformaciones finiseculares. No es ocioso reiterar que el aumento de las actividades terciarias no ha supuesto otro paralelo de su productividad. Es precisamente en los servicios, donde la brecha de productividad con otros países avanzados se acusa más.

Esta combinación de cambios demográficos y económicos ha transformado la estructura clasista de esta sociedad. Una forma de acercarse a ella es a través de la distribución ocupacional (Garrido, González, 2005: 82). Se dispone de una fuente de calidad para hacerlo, la EPA, que siendo una clasificación

ocupacional y por lo tanto de matriz funcionalista, además permite una lectura de corte marxista al distinguir entre propietarios de medios de producción y quienes no lo son. Diferencia toda una serie de conjuntos tanto en lo que se refiere a clases medias, como a clases trabajadoras. Cierto que evita una cuestión dirimente, la segmentación del mercado de trabajo en razón a diferencias contractuales, pues no en vano muchos piensan que supone la existencia de infranqueables barreras en el mercado de trabajo. Aludiré a ello más tarde.

Empecemos señalando que la población activa registra un aumento que supera en términos relativos al demográfico. O sea que hay una proporción mayor de personas implicadas en la producción, un avance en lo que ha sido *hándicap* histórico en nuestra economía y explicación parcial del aumento de la renta. Dos colectivos encauzan este crecimiento: mujeres e inmigrantes. Las primeras destacan en los servicios, son mayoritarias entre el personal sin cualificar, pero lo son aún más entre administrativos, comerciales y técnicos, sobre todo en la función pública donde los procedimientos reglados frenan mecanismos de discriminación de género y les permite ocupar puestos de alta responsabilidad. En cuanto a los segundos, su flexibilidad y complementariedad con el empleo de los nacionales, es destacable. Son peones de la construcción, jornaleros del campo, camareros, dependientes, mozos de transporte o de taller y en el caso de las mujeres, trabajan en servicios domésticos. Subrayaré el carácter complementario del trabajo de los emigrantes. En modo alguno han competido con el trabajador autóctono. Los mejor formados de españoles se ubicaron en espacios “de calidad” dejando a aquellos los puestos de trabajo menos protegidos y peor retribuidos. Son el ámbito de la temporalidad, aunque compartido con muchos jóvenes, justo los menos preparados académicamente. Un lastre que se ha visualizado con la crisis pues ambos colectivos, jóvenes valencianos sin formación e inmigrantes, son los más afectados por el paro.

El fuerte crecimiento de la población activa ha sido determinante en el aumento del PIB, pues no en vano es la base del factor trabajo disponible para la producción. Ni siquiera se ha frenado con la crisis ni ha variado el protagonismo de mujeres e inmigrantes en ese aumento. Los y las jóvenes con formación encontraron trabajos cualificados y mejor remunerados –pese al actual paro, el de los universitarios se halla muy por debajo de la media y no supera el 12%– que los ocupados por inmigrantes. El excesivo peso de la construcción introduce un fuerte desequilibrio pues acentúa la dependencia de nuestro modelo de crecimiento respecto de la coyuntura y revela su fragilidad en cuanto aparecen dificultades. Afecta más que a nadie a los jóvenes pues aunque también repercute sobre los inmigrantes, estos tienen una mayor flexibilidad, movilidad, capacidad de adaptación e incluso nichos de empleo propios –el caso de la atención a mayores para las mujeres extranjeras es un ejemplo– que les ofrece algún refugio parcial. Con todo y aunque los datos aún no lo recogen nítidamente, sí parece observarse un leve reflujó en la corriente inmigratoria.

Respecto a la estructura ocupacional, sus perfiles son, con matices, comunes a los analizados para el conjunto español. El primero haría referencia a la intensa desagrarización pues no llegan al 3% de la población activa, los ocupados en la agricultura. Como quiera que se acusa más entre los labradores o pequeños propietarios, esto supone una fractura de dimensiones históricas en el caso valenciano, pues comporta la desaparición de unos modos de vida y trabajo cuyos rasgos llegaron a caracterizar esa imagen huertana y minifundista tan característica como, a la vista de los datos, perdida en el tiempo.

El segundo perfil corresponde al ya aludido crecimiento de los trabajadores de servicios. Tan intenso que ha cambiado el sentido y composición de la clase trabajadora. Su grueso se localiza en los servicios lo cual les dota de características propias, más cerca-

nas a las de la clase media baja que al proletariado. Sin contar a los parados (pese a que en su mayoría corresponden a este grupo, son un colectivo interclasista) la clase trabajadora supondría en 2007 el 62,6% de la población activa y hace treinta años el 68,2%. Pero de ese 68,2%, 44,7 puntos correspondían a los obreros cualificados, peones y jornaleros, con abrumadora presencia de los primeros cuya centralidad era incuestionable. Hoy ese mismo conjunto aporta sólo 26,3 puntos. Al respecto nos parece determinante el dato referido a los obreros manuales especialistas: eran un tercio de la población activa ocupada, hoy sólo una quinta parte. Obviamente al hablar de porcentajes, en la misma medida crecía un nuevo proletariado de servicios en número y proporción. Si hace treinta años eran el 23,5% de los ocupados, en 2007 sumaban casi tres cuartos de millón de empleados, la tercera parte del total. Y ello sin contar a los gerentes, directivos y altos funcionarios pues si bien son asalariados se integran en las clases medias e incluso en la clase alta.

Aquellos obreros clásicos, con oficio, sindicalizados y con conciencia de clase, no son mayoritarios (lo constataremos después con datos) y ni siquiera constituyen el núcleo ideológico-político de la clase trabajadora. No es cuestión baladí. Preocupa y mucho a la izquierda europea y no por casualidad. Era el núcleo social, ideológico y político en torno al cual se tejía la alianza de clases que sostenía a la socialdemocracia. La clase obrera, la que generaba y difundía conciencia de clase, la más sindicalizada, ha perdido su posición central entre las clases trabajadoras y no es cuestión de número, sino de autoconciencia y cosmovisión. Hoy la fábrica no es el lugar donde se socializa y afianza la conciencia de clase. La reestructuración productiva generada por los mercados globales socava las bases sobre las que se asentaba su identidad de clase. La ubicación y funcionalidad del obrero industrial en el postfordismo es otra. Su sindicalización aportaba estabilidad integrando la fuerza de trabajo y hasta los convenios colectivos respondían a las exigencias

de las macroestructuras productivas. No así en un escenario de "fábricas en red", externalización de procesos productivos e individualización de las relaciones laborales. Un activo foro del socialismo francés lo detectaba. Mitterrand obtuvo el 72% de los obreros que suponían entonces el 37% de la población activa; en 2007 al candidato presidencial socialista le votaban el 50% de un colectivo que era el 28% de la población activa. Añadía como resumen que había menos obreros y votaban menos a la izquierda (Jeanbart, Ferrand, Prudent, 2011).

Más variados los perfiles que se engloban en los epígrafes que reflejan la diversificación de las clases medias. Porque hay entre ellos, representantes de la clase media de corte gremial (*botiguers*, tenderos, pequeños negocios, talleres, profesionales por cuenta propia...) cuya continuidad responde a la industrialización española, tardía y acelerada, que la alimentó. Cabe advertir que entre los autónomos no hay que a causa del *outsourcing* y la externalización de procesos productivos y comerciales, son asalariados encubiertos o falsos autónomos que aumentan el colectivo. En realidad las más fuertes tasas de crecimiento corresponden a las nuevas clases medias emergentes, asalariadas y vinculadas al desarrollo capitalista, no siempre en el ámbito del mercado sino en el del Estado. Nacen de los procesos de cambio tecnológico, reestructuraciones empresariales, ampliación de servicios públicos o privados, del cambio en la cultura o la comunicación, etc. y responden a la demanda de gerentes, directivos, ejecutivos, comerciales, técnicos cualificados, altos funcionarios, etc. Comentario singular para los empresarios, pues mayoritariamente se integran en las clases medias ya que en su mayor parte son pequeños o medianos, más en estos años en que se ha potenciado la figura del emprendedor y las formas de autoempleo.

Procesos de diferenciación interna y segmentación en las clases trabajadoras y medias, de acusada movilidad descendente y tímida movilidad ascendente. Cuestiones que

apunta pero no define la EPA. De lo referente a la clase trabajadora, hemos dado cuenta pero añadiré que al discurrir la reestructuración productiva por la vía de la flexibilización laboral, la segmentación resultante provoca conflictos intraclásistas entre *insiders* y *outsiders*. Y muchas veces, generacionales pues es entre los jóvenes donde más amplio espacio encuentran la temporalidad y la precariedad. En cuanto a las clases medias se detecta esa movilidad descendente e incluso proletarianización, al punto de ser frecuente referirse al declive de las clases medias cuando no a su final (Gaggi, Narducci, 2008) con quiebra de sus valores y seguridades básicas. Pero también ascendente, de esos sectores de ejecutivos o profesionales a que acabo de aludir, con acceso a las fuentes de riqueza por su control de la información, conocimiento y proximidad a las clases dominantes. Tienen mayor capacidad de evasión fiscal pues no es la misma presión la ejercida sobre una nómina que sobre ingresos variables y tantas veces opacos. Y a veces, con sueldos tan elevados (caso de los ejecutivos de la banca o de representantes políticos en consejos de Cajas y empresas públicas o privadas) que los integran en la clase dominante pese a no poseer medios de producción. No es extraño que se proponga para definirlos el concepto de "clase corporativa" más allá del tal vez anacrónico, concepto de burguesía (Subirats, 2012: 149).

Finalmente habremos de referirnos a algo que se oculta tras algunos epígrafes de la EPA: el rostro de la pobreza y la desigualdad. Como después nos ocuparemos de ella, baste decir aquí que pese a la disparidad de las fuentes hay coincidencia en aceptar un ligero descenso de la pobreza severa desde mediados de los 80, cuando los mecanismos del Estado del Bienestar empezaron a desplegar programas contra la exclusión. En cambio la pobreza relativa (ingresos por bajo del 50% de la media salarial) se ha mantenido con leves oscilaciones entre el 14 y el 16% de la población. Plantea una reflexión en la que después insistiré. Ni siquiera en una fase alcista como la vivida de 1996 a 2007, esta so-

ciudad y su modelo de crecimiento, es capaz de aminorar sustancialmente este problema y mantiene hasta en épocas de auge, a una sexta parte de su población en la pobreza. La crisis se agudiza y realimenta a partir de esa realidad. Y algo más, cambia su fisonomía al ampliar el espacio de la pobreza sobre unos parámetros de medición distintos, derivados del descenso general de la renta.

2. CRISIS ECONÓMICA Y CLASES SOCIALES

Sobre esa estructura sociocupacional se abatió la crisis, que aquí tuvo cierta peculiaridad. Los valencianos, como tantos otros pero quizás aún más, se encomendaron al endeudamiento, a la plusvalía y al gasto. Al calor de la abundancia de liquidez, los bajos tipos de interés y la demanda creciente de vivienda, familias, inversores e intermediarios financieros infravaloraron los riesgos y se embarcaron en la aventura inmobiliaria que, aparte otros excesos consumistas, también a crédito, define la especificidad de la crisis en estas tierras. Una crisis que más allá de truncar sueños de auge indefinido en una Florida valenciana, vino a descubrir las debilidades de nuestra economía y nos reubicó en la vieja periferia europea. La inversión impulsada por el exceso de liquidez se desacopló respecto al aumento real del PIB y lo que era pinchazo de la burbuja inmobiliaria pronto se transformó en crisis financiera (con la CAM como ejemplo emblemático) y contagió a la economía real: restricción del crédito a empresas y personas, contracción de la demanda, ajustes laborales, aumento del desempleo, caída de los ingresos públicos, aumento del déficit... Un cuadro conocido sobre al que poco podemos añadir que no se haya dicho con más rigor, brillantez u oportunidad.

Lo cierto es que en tres años la crisis se ha asentado en la economía y sociedad valenciana. Si se originó en el estallido de la burbuja inmobiliaria con sus repercusiones inmediatas sobre el sistema financiero y la

construcción, pronto se extendió a la economía real. La industria ya mostraba signos de maduración que la hacían más sensible a la crisis. La pérdida de riqueza y renta ha sido tan súbita como intensa. La renta *per cápita* cayó en 2010 un 9% respecto al 2007, en 2009 el PIB registró una tasa de crecimiento negativo, de -4,3%, y la contracción de la demanda hizo que la cifra de negocios de las empresas descendiera un 15%. No son sólo las pymes, las cien mayores empresas valencianas declaraban en 2009 un resultado neto de 148 millones cuando en 2008 lo hacían de 388. No está de más una referencia a la caída de rentabilidad de los productos en que a través de sus SICAV, invierten destacadas familias valencianas. Los ricos también lloraron pero menos que lo harían los parados. Porque sin duda, el rostro más visible de la crisis en la Comunidad lo constituye la intolerable tasa de desempleo, más del 23% y siempre superior a la media española, lo cual supone casi la cuarta parte de los activos, medio millón largo de personas sin empleo o al menos sin empleo legalmente regulado pues tampoco cabe ignorar el recurso a la economía sumergida. Es el dato más relevante y doloroso de la crisis. Procede pues, presentar los datos de la EPA que nos ayuden a visualizar el impacto de la crisis en los distintos grupos sociales.

Atendamos en primer lugar a los grandes números: se ralentiza pero aún crece la población activa; cae el número de ocupados; aumenta de modo espectacular el de parados; se mantiene el avance de las mujeres en el mercado laboral. El primer y el cuarto fenómenos eran tendencias sostenidas desde los 80. En ambos casos cabe esperar una ralentización pero no que la tendencia se invierta. A medio plazo, cuando se retome la senda del crecimiento, aunque sea con unas características distintas, la inmigración continuará y desde luego, la incorporación de las mujeres al mercado laboral tiene aún recorrido. Sí es de esperar que con menor intensidad en ambos casos. En cambio, el segundo y tercer fenómenos se vinculan directamente a la crisis y en ese sentido se les

Tabla 1. Evolución estructura sociocupacional en la C.V.

	1996		2007		2011	
	nº (miles)	% P.Oc..	nº (miles)	% P.Oc.	nº (miles)	% P.Oc.
Empleadores	78,7		128,3		105,4	
Empresarios agrarios con asalariados	5,9 (6,2)	0,5	4,2 (5)	0,2	2,7 (6,9)	0,1
Empresarios no agrarios con asalariados	72,8 (24,7)	5,6	124,1 (24,3)	5,6	102,7 (28,6)	5,4
Autónomos	207,7		250,7		214,7	
Propietarios agrarios sin asalariados	33,2 (15,9)	2,6	21,5 (18,5)	1	16,5 (31,3)	0,9
Empresarios no agrarios sin asalariados	139,7 (35,4)	10,8	155,4 (35,8)	7	153,8 (36,4)	8,2
Profesionales por cuenta propia	34,8 (28,6)	2,7	73,7 (34,3)	3,3	44,4 (33,8)	2,3
Asalariados	992,2		1.825,8		1.552,2	
Gerentes, directivos, altos funcionarios	26,1 (17,7)	2	37,3 (23,1)	1,7	46,4 (31,6)	2,4
Profesionales, técnicos, jefes de dptos.	146,5 (37,2)	11,3	310,5 (47,1)	14	310,9 (54,6)	16,5
Administrativos y comerciales	195 (56,8)	15,1	381 (71)	17,2	373,7 (70,1)	19,8
Resto personal de servicios	171,8 (61,8)	13,3	351,5 (68,7)	15,8	330,3 (62,4)	17,5
Capataces, especialistas, obreros cualificados	336,1 (13,6)	26	558,3 (10,3)	25,1	373 (11,5)	19,8
Peones, obreros sin cualificar	74,5 (34,5)	5,7	141,2 (32,8)	6,4	83,6 (36,5)	4,4
Asalariados agrarios, jornaleros	42,2 (14,1)	3,3	46 (18,8)	2,1	34,4 (13,7)	1,8
Otros	14,5	1,1	14,8	0,6	9,5	0,5
Total ocupados	1.293,1 (34,6%)	100	2.219,6 (40,9)	100	1.881,8 (45,3%)	100
Parados	343,2 (51,4%)	20,9	213,2 (56,3)	8,8	612,4 (44,2)	24,5
Total población activa	1.636,3 (38,2)		2.432,8 (42,1)		2.494,2 (44,8)	
(6,2)% de mujeres 0,5% sobre ocupados 20,9% sobre pobl. activa						

Fuentes: INE-EPA, media de los años correspondientes.

podría considerar coyunturales. Bien, pues tal vez no lo sean. De un lado, la dificultad de la economía española en general y valenciana en particular, para crear empleo sobre bases distintas a las del período anterior y de otro, los perfiles actuales del paro, plantean más de una incógnita de futuro. Incógnitas que nos demandan centrarnos en el detalle de los datos.

La "década prodigiosa" de la economía valenciana casi generó un millón de puestos de trabajo. Desde 2008 ha destruido más de un tercio de ellos. Una idea extendida es que la principal causa hay que buscarla en la construcción, aunque sea en los servicios donde mayor número de parados exista por razones obvias de tamaño del sector. Es verdad, en términos relativos, que es en la construcción donde se produjo de forma más súbita e intensa la caída del empleo. Y lo es que en términos absolutos, es el sector servicios el que registra mayor número de desempleados. Pero ese dato enmascara lo que bien pudiera ser un fenómeno de largo recorrido, la crisis del empleo en la industria. En los cuadros se apunta en el descenso registrado en los epígrafes de obreros cualificados y de peones, mayoritariamente vinculados a la industria o a la construcción. Los datos por sectores del INE nos dicen que a inicios del 2012, el sector industrial habría no sólo perdido todos los empleos creados en la fase alcista sino que ocuparía a menos gente que cuando se inició aquella. Entre 1996 y 2007, la industria pasó de 360 a 413.000 puestos de trabajo y en 2011 sólo quedan 317.000. Como quiera que la agricultura sigue perdiendo efectivos y que no es factible que la construcción recupere a medio plazo un volumen de empleo sustancial, el futuro quedaría indefectiblemente ligado al desarrollo de los servicios y a la renovación del modelo industrial. La cuestión estriba en saber si los datos del cuadro anterior condicionan el proceso.

Así, vemos que la mayor merma de efectivos se da entre peones y obreros sin cualificar de la construcción o la industria que han perdido un 40%, los jornaleros del campo con un

retroceso del 33% y los capataces y obreros cualificados que en tres años han perdido un 30% de sus efectivos. En números redondos significa que sólo en estos tres grupos se ha perdido un cuarto de millón de puestos de trabajo. En cambio, en otras ocupaciones, el descenso no es tan acusado. Empresarios y autónomos son colectivos que suelen presentar alta movilidad más allá de la coyuntura y que si en el caso de los empresarios el 12% de caída entra en la lógica de la crisis con sus suspensiones de pagos y quiebras, en el caso de los autónomos el 7% parece corto a la vista de las dificultades por las que atraviesan. Tal vez enmascara el autoempleo y el *outsourcing* de tantas empresas que obliga a no pocos trabajadores a darse de alta como autónomos para trabajar, abaratando costes laborales unitarios. También descende el personal sin cualificar de los servicios (un 7,5%) aunque con acusadas oscilaciones estacionales como corresponde al reino del contrato temporal. Finalmente, es inapreciable la caída en vendedores, empleados, administrativos y funcionarios, se mantiene el colectivo de técnicos, profesionales o jefes de departamentos y destaca el crecimiento entre gerentes, directivos, altos funcionarios y ejecutivos. Los servicios, del sector privado y del público siguen siendo el primer espacio del empleo y en el de más calidad, es incluso de creación neta de empleo.

Volvamos al que nos parece dato relevante. El trabajo asalariado en industria, en construcción y en agricultura es el que más padece el desempleo. Junto con aquellos que buscan su primer empleo, visualizan con crudeza el coste social de la crisis. Porque los ajustes del empleo han recaído sobre los más débiles contractual y ocupacionalmente considerados. Es una consecuencia de un mercado laboral cuya dinámica dual durante los años de expansión del empleo, hizo que los puestos de trabajo menos cualificados fuesen ocupados por inmigrantes, antiguos parados, mujeres que se incorporaron a la actividad y jóvenes que abandonaban sus estudios sin completar sus ciclos formativos. Casi las tres cuartas partes de esos nuevos

asalariados lo fueron con un contrato temporal. Esa es la fisonomía del paro que concreta en jóvenes –casi 110.000 parados tienen entre 16 y 24 años, una tasa de paro superior al 43%- e inmigrantes –en este caso son cerca de 175.000, una tasa del 35%- los dos colectivos más amplios, a los que se suma la presencia de mayores sin cualificar y de mujeres, a veces solas y con cargas familiares o con el marido en paro, que en ocasiones buscan su primer empleo.

Ese numeroso conjunto de personas constituyen hoy por hoy, el problema más serio a enfrentar los próximos años. Porque es una población en riesgo grave de exclusión. No obstante, antes de explayar esta cuestión, permítaseme aludir a colectivos no clasistas como son los que componen la población inactiva. Porque asimismo es una tendencia contrastada el aumento de pensionistas y jubilados, en parte debido al envejecimiento poblacional, en parte por la ampliación de pensiones gracias al avance del sistema de protección, pero también porque la crisis ha provocado prejubilaciones. Es cuestión que gravita sobre el gasto público y se acentúa cuando desciende el número de ocupados, planteando dudas acerca de la sostenibilidad del sistema.

3. ANTE EL RIESGO DE UNA FRACTURA SOCIAL

Los datos apuntan ya a un incremento de la pobreza que en su caso, sería acumulativa, pues antes señalábamos que la fase alcista había enquistado el problema en una proporción cercana al 16%. Pese a la lentitud de las estadísticas en recoger las nuevas realidades, esa cifra habría saltado por encima del listón del 20% con el repunte de la crisis en 2011. Podríamos establecer una hipótesis. En 2009 habría crecido ligeramente la pobreza y muy poco la desigualdad, en parte porque el primer golpe de la crisis habría afectado también a algunas fortunas, bien por quiebra de sus negocios, bien por depreciación de inversiones y patrimonios. Casos sonados

hubo en esta Comunidad. Pero la recaída posterior daría un protagonismo mayor a las consecuencias del desempleo, haciendo crecer pobreza y desigualdad. Es relevante la relación entre el aumento del paro, singularmente el de larga duración, y la evolución de ambos fenómenos. No es casual que la tasa de paro salte de un 8 a un 24%, que el de larga duración lo haga en tres desde el 2 al 11%, que la pobreza moderada pase del 15,2 a 16,9% y algunos aumenten esta cifra al 19,6% (Laparra, 2010: 4) y el índice de Gini referido a la desigualdad haya saltado hasta el 0,326 en la Comunidad Valenciana y al 0,339 en España. (INE, 2012). En ambos casos sobrepasaría la media de la OCDE que habría crecido en este tiempo, desde el 0,285 al 0,315. Con el riesgo de seguir aumentando en todos esos espacios, autonómico, nacional y europeo porque si esas cifras están ya constatadas, las referidas a población en riesgo de caer en la pobreza aumentarían en tres o cuatro puntos esas referencias.

Si en los años interseculares se detectó lo que dio en llamarse nuevos rostros de la pobreza –viejos, familias monoparentales, niños, etc.- la crisis ha venido a intensificar algunos de esos rasgos y añadido nuevos. Inmigrantes y jóvenes son los colectivos que hoy presentan más alto riesgo de exclusión social, pues no en vano muchos de ellos se han instalado en la precariedad. Y con rasgos muy preocupantes. Gravísimos cuando afecta a jóvenes que tomaron la decisión de constituir una familia en los años de bonanza, a veces previo abandono de sus estudios. Y no menos cuando lo hace sobre inmigrantes sin vínculos familiares, redes de protección y a veces sin el propio aval de la legalidad. Es además, un fenómeno particularmente urbano pues al concentrar las ciudades, el grueso de población y empleo, es en sus barrios donde se ubican los espacios del conflicto. De hecho empieza a haber ejemplos de incipientes “ghettos” que en algunos lugares –en Cataluña son algo más que un ejemplo aislado- están planteando conflictos convivenciales y alimentado populismos xenófobos. O los bandos municipales contra la

mendicidad callejera, la prostitución y otras formas de marginalidad que se han repetido recientemente. Por no hablar del espectáculo de los desahucios de vivienda por impagos de hipotecas. De forma directa o sutil, avanzan formas de "criminalización" de la pobreza (García Roca, 2012: 31).

Hay cuestiones de base que impiden cualquier optimismo sobre la solución del problema a corto plazo. La población activa sigue creciendo y resulta excesiva para que pueda ser absorbida con las tasas de crecimiento económico previsibles en un horizonte temporal razonable. El volumen y características de la economía valenciana harán que tarde en poder dar empleo a una población potencialmente activa que ya sobrepasa los 4 millones y que aún no ha visto reducir sustancialmente el número de inmigrantes. Una gran parte de la actual generación entre 16 y 25 años, precisamente la que menos armas tienen por su escaso bagaje formativo (la tasa de paro entre universitarios no sobrepasa el 12%) ve un futuro pleno de incertidumbres cuando no de negros presagios. Y en ese ámbito nos permitiremos focalizar el problema en los olvidados "ni-nis", ni estudian ni trabajan. La sociedad bien poco les puede ofrecer, es más, dicho con crudeza, no los va a necesitar pues no podrán ocupar puestos cualificados en la industria o en los servicios de calidad, la construcción no dará tanto de sí y camareros ya los hay. Nada que añadir en lo que se refiere a un colectivo de inmigrantes que no sólo se enfrentan a la actual falta de trabajo, sino que lo hacen, ahora sí, en competencia con una población autóctona con la que antes eran complementarios y hoy competitivos. Una bomba social en potencia asentada en los barrios urbanos.

Una situación tal, emplaza sendos ámbitos. El del empleo y el de la protección social, el mercado laboral y el Estado del Bienestar. Y ambos son una incógnita de cara al futuro inmediato, que es el que interesa. El futuro a largo plazo planteará sin duda, escenarios distintos, tal vez modelos productivos y sistemas de protección social diferentes. Pero

hoy lo que plantean los ámbitos citados son problemas: ¿cuánto debe crecer la economía valenciana para absorber un paro que excede la cuarta parte de la población activa? ¿hasta qué punto el sistema público de protección social puede derivar nuevos fondos a programas formativos y/o de inclusión social para ese creciente colectivo de jóvenes e inmigrantes en paro?

Hemos constatado cómo la vía previsible de creación de empleo discurrirá por el sector de los servicios avanzados. Suele al respecto, insistirse en la conveniencia de proceder a una reforma del modelo productivo. Sí, y desde luego hay que exigir a las administraciones que ayuden a crear las condiciones que faciliten ese tránsito hacia una economía de servicios avanzados, mayor complejidad tecnológica, más productividad y competitividad... Pero los modelos productivos no son consecuencia del deseo de un planificador sino respuesta a oportunidades de mercado en un contexto histórico dado y el uso de la "expresión "cambio de modelo" transmite una visión voluntarista de lo que es posible conseguir a corto y medio plazo como si los modelos de crecimiento fueran platos precocinados y no fruto de una larga historia con sus condicionantes" (Reig, 2010: 12). A corto plazo una economía con el déficit de productividad que tiene la valenciana, no permite esperar una recuperación tan potente y tan rápida como para rebajar las cifras de paro de forma sustancial. Parece imprescindible empezar por mejorar la productividad de los servicios pues es ahí donde la diferencia con otros países es mayor, pero también de una industria que exporta ya con razonable éxito. Y seguir potenciando el turismo y etc., etc. O lo que es lo mismo, hacer mejor lo que ya hacemos bien y por supuesto, promover ese cambio de futuro a una economía avanzada.

Pero lo inmediato es gestionar la transición a ese posible modelo y eso no presenta un panorama halagüeño.

Porque otro tanto puede decirse del futuro del Estado del Bienestar. Se debate entre profundas presiones contrarias, unas expansivas, otras restrictivas. Entre las primeras, las demográficas por el envejecimiento que afectará al sistema de pensiones, al gasto farmacéutico o sanitario y la atención a dependientes; las educativas, por las exigencias de mejora del capital humano; las de procura de inclusión social, etc. Entre las segundas, la restricción del gasto público, que imponen las necesidades de financiación sostenible del sistema y las de competitividad, frente a las potencias emergentes y mercados globales. Convertida la consolidación fiscal en política obligada por mucho tiempo, bastante harán los poderes públicos en compaginar los recortes con el mantenimiento de los servicios imprescindibles para evitar una fractura social.

En ese contexto, esos jóvenes sin formación, esos colectivos de inmigrantes no parece que puedan encontrar fácil acomodo ni en uno ni en otro ámbito. Porque a mayor abundamiento, están atrapados en una contradicción difícil de resolver. Obligados los sindicatos a defender la estabilidad en el empleo y los actuales niveles de protección del Estado del Bienestar, no parece que puedan defender a estos colectivos más allá de declaraciones programáticas poco efectivas. Porque ese Estado del Bienestar no está pensado para *currícula* laborales discontinuos y dispersos. Al ser de base contributiva, premia en pensiones y subsidios, la estabilidad en el puesto de trabajo, la cotización prolongada. No, desde luego, la que puede figurar en esas vidas laborales hechas de contratos breves, pasos por la oficina del paro y temporadas de refugio familiar.

La realidad dibuja un panorama con pocas certidumbres. Falta ciencia económica y faltan liderazgos políticos. Entre la defensa a ultranza y acrítica de un Estado del Bienestar que no es tan redistributivo como se piensa y las reformas dirigidas a su recorte y su privatización parcial, debiera abrirse un espacio para consensuar prioridades y niveles de

protección pública. Porque puede ser cierto que el actual Estado del Bienestar como hoy lo tenemos sea difícilmente sostenible, pero más lo es que su reforma e incluso recortes no pueden olvidar que la prioridad son las personas. Y en este momento estamos hablando de más de la mitad de una generación en riesgo de exclusión laboral y social. No parece aventurado augurar que crezcan signos de malestar que se canalicen por la vía de la "indignación" o por la de la xenofobia, del corporativismo y del populismo. O que surjan voces que añoren viejas fronteras arancelarias y moneda nacional, que demanden políticas antimigratorias. De todo ello hay ejemplos en la geografía europea. Es tiempo, pues, para el liderazgo y la política. Para los valencianos nos resulta poco menos que imposible pensar que vendrá de mano de la socialdemocracia y para algunos no nos es fácil asumir que el protagonismo haya de corresponder sólo al conservadurismo.

BIBLIOGRAFÍA

- CAMPO, S. del; TEZANOS, J.F. dirs. (2008): *España siglo XXI. La sociedad*. Madrid: Ed. Biblioteca Nueva/Cajamadrid.
- GAGGI, M.; NARDUZZI, E. (2006): *El fin de la clase media*. Madrid: Ed. Einaudi.
- GARCÍA ROCA, J. (2012): "La criminalización de la pobreza". *Iglesia Viva. Estudios*, nº 249, pp. 31-52.
- GARRIDO, L.; GONZÁLEZ, J.J. (2005): "Mercado de trabajo, ocupación y clases sociales". En González, J.J. y Requena, M. eds: *Tres décadas de cambio social en España*. Madrid: Alianza Editorial. ps. 81-125.
- HERRERO, C.; SOLER, A., VILLAR, A. (2010): *Desarrollo humano en España. 1980-200*. Valencia: Ed. I.V.I.E.
- JEANBART, B.; FERRAND, O.; PRUDENT, R. (2011): *Gauche: quelle majorité électorale pour 2012?* Fondation Terra Nova. Disponible en la red.

LAPARRA, M. (2010): "El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España". *Cáritas/Fundación FOESSA*. Disponible en red.

PÉREZ, F. (Dir.); CUCARELLA, V.; FERNÁNDEZ, A.; HERNÁNDEZ, L. (2011): *Las diferencias regionales del sector público español*. Bilbao: Fundación BBVA.

REIG, E. (2010): "Sobre la situació actual de l'economía valenciana". Monográfico: *Nexe. I ara qué? El model productiu valencià a debat*. Valencia: Tirant lo Blanc, ps.9-15.

SUBIRATS, M. (2012): *Barcelona. De la necessitat a la llibertat. Les classes socials al tombant del segle XXI*. Barcelona: Novogràfic Impresors.

